



TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

CURSO ACADÉMICO 2017-2018

EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

THE ELECTRONIC JUDICIAL FILE

ANA GARCÍA IZQUIERDO

DIRECTOR/A:

VICTORIA LUISA ORTEGA BENITO

INDICE

1.	BREVE INTRODUCCION.....	3
2.	CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO	4
3.	FINALIDAD DEL PROYECTO	7
4.	CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL PROYECTO	8
5.	LEY 18/2011, DE 5 DE JULIO, REGULADORA DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	10
6.	PLANIFICACION Y FASES DEL PROYECTO.....	12
7.	APLICACIÓN REAL DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	22
8.	VENTAJAS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO.....	27
9.	INCONVENIENTES DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO	29
10.	PLAN E-JUSTICIA EN LA UNION EUROPEA	30
11.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
12.	BIBLIOGRAFIA	47

1. BREVE INTRODUCCION

España se encuentra en un momento de gran desarrollo de la administración electrónica y, actualmente son más de 24 millones de españoles los que disponen de DNI electrónico, uno de cada dos declaraciones de Impuestos sobre la Renta se hace vía telemática y más del 90% de los tramites con la Administración General del Estado puede realizarse por medios electrónicos.

Todos estos avances parten del reconocimiento del derechos de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración Pública, lo cual se aprobó en la Ley 11/2007 de 22 de Junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y gracias al impulso del Plan Avanza, que pretende impulsar la digitalización de los servicios públicos para conseguir mayor eficacia y vertebración.

Este proceso se ha llevado a cabo a un ritmo menor en la Administración de Justicia, pero esta también se ha sumado, con el fin de acercar las administraciones al ciudadano, tal como recoge la Ley 18/2011 de 5 de Julio, Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, y en línea con la estrategia europea en materia de E-Justicia, según la comunicación COM/2008/0329 de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, y al Comité Económico y Social Europeo.

Para lograrlo, uno de los puntos de mayor importancia en este proceso es el Expediente Judicial Electrónico y su implantación en todas las sedes judiciales y partidos judiciales del territorio. Este expediente constituye una de las actuaciones prioritarias del Plan Estratégico de Modernización de Sistema de Justicia, entre 2009 y 2012, mediante el establecimiento de las herramientas, los medios y los procedimientos para lograr una gestión integral del expediente judicial en formato electrónico, todo ello con el fin de conseguir una administración con papel cero, que a la vez, garantice al ciudadano una mayor agilidad, eficacia y transparencia en los procedimientos.

El Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia, entre 2009 y 2012, cumple 4 de los 5 objetivos que en él se recogen gracias al Expediente Judicial Electrónico, que son:

- facilitar el acceso a la información judicial a ciudadanos y profesionales
- potenciar el funcionamiento del Ministerio Fiscal y su coordinación con los órganos judiciales
- incrementar la eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia
- favorecer la comunicación entre las distintas instancias y operadores jurídicos.

La importancia de este proceso en el ámbito de la administración de justicia se observa en varios aspectos, desde lograr una mayor celeridad en la adopción de las resoluciones y por tanto reducir los tiempos de espera, hasta reducir las grandes cantidades de volumen de papel que se gestionan a diario en juzgados y tribunales.

Este expediente es el punto de partida, junto con otras medidas como la Oficina Judicial, para la modernización de la Justicia

2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Hacia mediados de los años 80 se iniciaron los primeros proyectos destinados a incorporar las tecnologías de la información y consulta para la mejora de la Administración de Justicia. Desde entonces, se han atravesado diversas fases hasta llegar al punto en el que nos encontramos:

1º- Fase de Ofimática: consistió en la aplicación de la informática para la confección de actos procesales escritos, mediante programas de tratamiento de texto.

2º- Fase de Gestión del Procedimiento: se procedió a la implantación de sistemas que permiten la tramitación automatizada de los procedimientos mediante esquemas de tramitación procesal y documentos

3º- Fase de Interoperabilidad: consisten en una serie de iniciativas para permitir que los sistemas usados en la Administración de Justicia compartan información y se comuniquen con otros sistemas para lograr así un mejor funcionamiento: con otros órganos judiciales, con profesionales del derecho, con entidades que colaboran con la Administración de Justicia y por supuesto, con el propio ciudadano.

En este punto cabe destacar los servicios prestados a través del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial y las comunicaciones telemáticas a través de Lexnet, desarrollado por el Ministerio de Justicia.

4º- Fase del Expediente Judicial Electrónico: esta última fase, la más actual desde 2010, trata de alcanzar la Administración de Justicia con papel cero. Es decir, es la culminación del proceso de incorporación de las tecnologías de la información y consulta en la Administración de Justicia.

España no es el primer país en implantar el Expediente Judicial Electrónico, ya que en diversos países de Iberoamérica ya se han desarrollado experiencias con este, como en Perú, Costa Rica, Chile o Brasil. En estos países las mejoras en la Administración de Justicia se sintetizan en:

- Ahorro de un 70% del tiempo, que antes se dedicaba a tareas burocráticas de petición, protocolo, distribución...
- Menor tiempo de duración de los procesos judiciales, que antes llevaban 5 meses para llegar al Tribunal Superior de Justicia
- Importante reducción del tiempo de las decisiones judiciales: actualmente los procesos son enviados en un solo día y distribuidos en el mismo día a un Ministro para decisión.
- Mejora en la transparencia e integridad de los poderes judiciales de América Latina.

Hasta poder llegar al Expediente Judicial Electrónico de forma plena, en nuestro país se han dado diversas experiencias en el sistema judicial que ha contribuido de forma necesaria para dar los pasos hasta la implantación de este, entre las que se encuentran las siguientes:

- Punto Neutro Judicial: es una red de servicios gestionada por el Consejo General del Poder Judicial que ofrece a los órganos judiciales el acceso a datos que son necesarios en la tramitación de los procesos, tanto en fase declarativa como ejecutiva, mediante el acceso a bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones.

La información obtenida de este Punto Neutro Judicial es íntegra, confidencial y fiable, ya que el Consejo General del Poder Judicial actúa como autoridad de sellado de tiempo, incorporando fecha y hora a un documento electrónico, y se cumple de esta manera la obligación de garantizarse la seguridad del entorno cercano de comunicaciones y la protección de datos que se transmitan que requiere la Ley 18/2011 en su artículo 24.

A través de portal web de acceso al Punto Neutro Judicial se accede a 39 servicios, entre los que se encuentran consulta tributaria, Seguridad Social, Dirección General de Tráfico, prestaciones por desempleo, Catastro, Instituciones Penitenciarias, embargos telemáticos...

- Lexnet: es una plataforma desarrollada por el Ministerio de Justicia, a través de la cual se produce el intercambio seguro de información entre los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales y una serie de personas que se relacionan con ellos, para la presentación de escritos, documentos y traslado de copias.

Lexnet empezó a funcionar en 2004, y desde entonces ha tenido un crecimiento importante en su utilización.

- Expediente Electrónico en las competencias gubernativas de los órganos judiciales: dentro del Consejo General del Poder Judicial existe un sistema de gobierno del Poder Judicial, del que forman parte otra serie de órganos que ejercitan competencias gubernativas también.

Por ejemplo, es importante destacar la implantación del sistema de gestión gubernativa de las Salas de Gobierno, para la tramitación de los expedientes en forma digital por estas y sus secretarías. Este sistema de gestión se encarga de procedimientos generales como registros de entrada y de salida, pero también de procedimientos de trámites personales de y magistrados como ceses, expedientes disciplinarios o solicitud de licencias entre otros, y procedimientos de Jueces de Paz también.

3. FINALIDAD DEL PROYECTO

Este proyecto en el que se incluye la implantación Expediente Judicial Electrónico está claramente enfocado a una modernización integral de los procesos judiciales, por tanto no se refiere solo a aspectos puramente relacionados con las tecnologías de información y consulta, sino también a los ámbitos de organización, de recursos humanos y de edificios judiciales.

Pero, centrándonos más en el Expediente Judicial Electrónico únicamente, está encaminado a lograr una Administración de Justicia con “papel cero”, que entre otras cosas, garantice una mayor agilidad, eficiencia, y transparencia de los procesos.

La implantación de este además supondrá un importante ahorro en recursos y una importante simplificación de la gestión documental, lo que se traduce en más rapidez a la hora de adoptar las resoluciones y con ello, reducción de los tiempos de espera.

El fin último, y el fin más importante es lograr una Administración de Justicia más segura y garante de los Derechos de la Ciudadanía.

Teniendo en cuenta la Ley 18/2011 de 5 de Julio, Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, donde se recoge la línea a seguir, con un plazo de cuatro años desde su entrada en vigor, que fue en Julio de ese mismo año, para garantizar la plena interoperabilidad entre los sistemas con los que trabaja la Administración

de Justicia, y un plazo diferente de 5 años, para que se integre la tramitación electrónica en los procedimientos judiciales y abandonar así por completo el formato papel.

Por tanto, la implantación del Expediente Judicial Electrónico lograra cumplir con los objetivos que la ley antes citada marcó:

1. Una justicia más accesible: ya que se podrán consultar documentos del Expediente Judicial desde cualquier lugar con acceso a internet y no será necesario acudir a una Oficina Judicial.

2. Una justicia más transparente: pues será más fácil el acceso al estado del procedimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento

3. Una justicia más ágil: pues al tramitarse todo de forma electrónica se reducirán de forma importante los plazos

4. Una justicia más sostenible ecológicamente y económicamente: el ahorro en papel y costes de traslado es muy importante

5. Una justicia mejor interconectada: se hará de manera más sencilla el intercambio de información y la comunicación entre órganos judiciales, fiscales, organismos e instituciones.

4. CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL PROYECTO

Es importante dejar claros algunos conceptos de cierta relevancia y que, de ahora en adelante tendrán protagonismo:

1. Administración Electrónica: consiste en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las Administraciones Públicas, combinando cambios organizativos y nuevas aptitudes, para mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos, y además, reforzar el apoyo a las políticas públicas.

2. Documento Judicial Electrónico: es toda resolución y actuación que se genere en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al expediente, cuando incorporen datos firmados electrónicamente.

3. E-justicia: consiste en el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia, y además para la eficacia de la acción judicial, entendida esta como toda actividad que consiste en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta.

4. Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS): Es el marco de colaboración bajo el paradigma de la compatibilidad, reusabilidad y seguridad, garantizando la implantación de la Administración Judicial Electrónica, a través de la interoperabilidad de todas las aplicaciones informáticas

5. Interoperabilidad: es la capacidad de dos o más sistemas automatizados para intercambiar información y para reconocer, procesar y usar esa información de forma correcta. Para lograr esto, los dos sistemas tienen que entenderse a varios niveles (semántico, sintáctico y técnico).

6. Metadatos: son datos que describen otros datos, y son toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso o dato, y que tienen como finalidad facilitar la recuperación, evaluación preservación o interoperabilidad.

7. Metadatos de gestión de documentos: sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y sistemas que los crean, mantienen y utilizan.

8. Portafirmas: es una herramienta cuyo fin es facilitar a los órganos y unidades administrativas el uso de la firma electrónica reconocida de documentos procedentes de diferentes sistemas de información independientes,..

9. Tipo documental: expresión referida a las unidades documentales con unas características estructurales normalmente homogéneas, de actuaciones únicas o secuenciales, reguladas por una norma de procedimiento, derivada del ejercicio de una misma función y realizadas por un determinado órgano, unidad o personas con competencia para ello.

5. LEY 18/2011, DE 5 DE JULIO, REGULADORA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Esta ley regula el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Los principales objetivos de esta norma son:

- En primer lugar, actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las nuevas tecnologías en las comunicaciones.
- En segundo lugar, generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia.
- En tercer lugar, definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados los participantes en el mundo judicial, para garantizar la seguridad en la transmisión de datos.

Existen en nuestro ordenamiento antecedentes que hacían necesaria la aprobación de esta norma. Entre ellos se encuentra la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de Noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, que introdujo por primera vez la posibilidad de utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad y ejercicio de las funciones de juzgados y tribunales.

Es a raíz de este primer antecedente, a partir del cual se han llevado a cabo muchas modificaciones en distintas normas a fin de hacer efectiva esta previsión. Pero ha de precisarse que estas modificaciones se han llevado a cabo obedeciendo a necesidades concretas y puntuales que se han detectado en distintas leyes procesales.

También se han aprobado normas relativas a la regulación de aplicaciones y sistemas informáticos utilizados en la Administración de Justicia.

Asimismo, en Abril de 2002 se aprobaba en Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en la que, en su preámbulo se recoge que la sociedad española en el siglo XXI, demanda con urgencia una justicia más abierta que dé respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporándose métodos e instrumentos más modernos y avanzados.

Es en 2007 cuando se aprueba la Ley 11/2007 de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esta norma supone el reconocimiento final del derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, y establece el régimen jurídico de la administración electrónica y la gestión electrónica de los procedimientos administrativos.

Poniendo el punto de atención en el plano internacional, la Unión Europea ha desarrollado el Plan de Acción E-Justicia, con el que se busca mejorar la eficacia de los sistemas judiciales mediante la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la gestión administrativa de los procesos judiciales. Además, este plan busca también lograr una mejor cooperación entre las autoridades judiciales y el acceso total de los ciudadanos a la justicia. Para lograr esto, se propone la adopción de medidas coordinadas a nivel nacional y europeo.

La ley presente ley consta de 56 artículos agrupados en 5 títulos, 12 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales:

- En el Título I se define el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación
- En el Título II se regula el uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia y se estructura a su vez en tres capítulos. En el primero de ellos se recogen los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia. En el segundo capítulo se recogen los derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia en sus relaciones con esta administración por

medios electrónicos. Y en un tercer capítulo se recoge la obligación de todos los integrantes de los órganos y oficinas judiciales y de fiscalías de utilizar exclusivamente los programas y aplicaciones informáticas puestas a su disposición por las Administraciones competentes.

- En el Título III se aborda el régimen jurídico de la Administración judicial electrónica. Dividida también en varios capítulos, en un primer capítulo se define lo que es una sede judicial electrónica y se establece el contenido mínimo que han de tener estas. En el segundo capítulo se tratan las formas de identificación y autenticación de ciudadanos y profesionales.

- En el Título IV se fijan las condiciones para hacer posible la integra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.

- En el Título V se abordan los aspectos básicos sobre los que debe asentarse la cooperación de esfuerzos entre las Administraciones con competencias en materia de justicia. Se constituye para ello el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica con competencias muy importantes de cara a favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empeladas en la Administración de Justicia. Se define el Esquema judicial de interoperabilidad y se establecen los principios generales a los que ha de responder la interoperabilidad entre las distintas aplicaciones, como la seguridad de la información contenida en ellas.

6. PLANIFICACION Y FASES DEL PROYECTO

Antes de abordar la planificación y diferentes fases del Expediente Judicial Electrónico, es necesario estudiar algunos aspectos o necesidades básicas para que se pueda garantizar esta implantación y se asegure su eficacia:

- Marco normativo adecuado: es importante para la implantación del Expediente Judicial Electrónico que exista un

marco legislativo adecuado, el cual regule todos sus aspectos desde el comienzo, incluyéndose también las notificaciones telemáticas y la forma de relación electrónica entre organismos públicos.

Destaca en primer lugar el Artículo 230.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los juzgados y tribunales podían utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones.

El Expediente Judicial Electrónico tiene además un marco normativo propio, donde se regulan los principales aspectos de su régimen legal. Es la Ley 18/2011, de 5 de Julio, Reguladora de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, publicada el 6 de Julio de 2011. En esta ley se recoge lo siguiente y en especial en los artículos 25 y siguientes donde se refiere de forma concreta al Expediente Judicial Electrónico:

- Artículo 4 y 6.1: derechos de los ciudadanos y de los profesionales de la justicia a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos.
- Artículo 8 y 46: obligatoriedad de uso en la Administración de Justicia de los medios técnicos que estén disponibles en cada momento
- Artículo 6.3 y 37: obligatoriedad de uso de medios técnicos por profesionales
- Artículo 25 y siguientes: una vez disponibles los medios técnicos, se tramitara el Expediente Judicial Electrónico. Se recoge su desarrollo normativo técnico a través de las guías de interoperabilidad y seguridad aprobadas por el Comité Técnico Estatal de Administración Electrónica, en el Artículo 51.

- Disponibilidad de medios técnicos: para que el Expediente Judicial Electrónico logre alcanzar el éxito que se busca con su implantación, no solo es necesario una regulación normativa, sino

también que quienes presten servicio en la administración colectiva y que quienes se relacionan con ella tengan disponibilidad de los medios técnicos precisos.

Pero, el momento en el que estos medios técnicos estén disponibles dependerá de cada administración competente, es decir, de Ministerio de Justicia, o Comunidad Autónoma con competencias en la materia. A pesar de esto, en la Ley 18/2011 se recogen dos plazos importantes:

- Disposición Adicional 2ª Ley 18/2011: las administraciones competentes, en el plazo de 5 años, dotaran a las Oficinas Judiciales y Fiscales de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.
- Disposición Adicional 5ª Ley 18/2011: las administraciones competentes, en materia de justicia dotaran a todos los órganos, judiciales y fiscalías, de los medios electrónicos necesarios y suficientes para poder desarrollar eficazmente su función.

Una vez abordadas estas aclaraciones, ya en referencia al proyecto de implantación del Expediente Judicial Electrónico, y sus fases, y debido, sobre todo, a la complejidad y repercusiones que esta implantación tendrá especial relevancia realizar una correcta definición del mismo, la cual debe abarcar no solo los requisitos funcionales y las características técnicas sino también, todo el proceso de transición.

Además, no solo se limitara esta definición al ámbito tecnológico, sino que debe integrar todos los aspectos implicados, como el organizativo, jurídico, formativo...

Y por último, la definición del proyecto debe asegurar la estabilidad del proceso de implantación en todo momento y para todas las partes que se van a ver afectadas e implicadas.

Para facilitar el desarrollo de proyecto y garantizar su adecuada implantación, esta etapa específica se desglosa en tres fases principales:

1º. Fase de Despliegue: comprende el conjunto de actividades de planificación, preparación y adecuación, que son necesarias para que el expediente judicial electrónico entre en servicio, y finaliza con la puesta en funcionamiento del mismo.

2º. Fase de Transición: se encargara de todas aquellas actividades que aseguran que no exista solución de continuidad en el cambio al expediente judicial electrónico, minimizando los posibles aspectos adversos consecuencia del cambio.

3º. Fase Operativa: incluye las actividades necesarias para el correcto funcionamiento del nuevo modelo, su revisión y mejora y para la resolución de las incidencias que surjan hasta que se alcance su estabilización.

Además, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos, también en relación con el desarrollo de este proyecto:

a) Incorporación de la totalidad de la documentación vigente correspondiente a los registros y expedientes judiciales en curso, mediante la digitalización de la información disponible.

b) Mantenimiento actualizado de la documentación íntegra de cada expediente, estableciéndose un mecanismo para la incorporación diaria de todos los documentos en papel que se presenten.

c) Incorporación de toda la información judicial en el Expediente Judicial Electrónico para su consulta y acceso, eliminándose así las distancias físicas y temporales.

d) Clasificación y catalogación de la información para que el acceso y consulta sea adecuado, implantándose un adecuado gestor de documentos que permita realizar búsquedas y ahorre tiempo y espacio.

e) Incorporación de la firma electrónica para garantizar la seguridad y el control en todo el proceso, siendo necesario que se dote a los usuarios de instrumentos de autenticación y firma y si fuera necesario, creándose una plataforma de firma digital propia para el órgano judicial.

f) Integración, potenciación y adaptación de los sistemas informáticos actuales y de los procedimientos de gestión vigentes,

mediante la interconexión de sistema de gestión procesal y el sistema de notificaciones y comunicaciones telemáticas, y aplicándose los mecanismos para favorecer la gestión del cambio hacia los nuevos procesos asociados a la implantación del expediente judicial electrónico.

La primera etapa a abordar en el proceso de implantación del expediente judicial electrónico comprende la identificación de los elementos y las características básicas que deben integrarse en la solución final y en la arquitectura global de este expediente.

El desarrollo del proyecto de implantación del expediente judicial electrónico se caracteriza por la integración en el mismo de cuatro módulos fundamentales que son los siguientes:

- Sistema de Gestión del Expediente Judicial Electrónico: comprende el acceso, la visualización, tramitación, desarrollo etc. del expediente.
- Servicio de Digitalización: integra los elementos necesarios para el mantenimiento del expediente actualizado.
- Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS): el desarrollo del proyecto debe estar alineado con la línea que marca el EJIS, de forma que se garantice la viabilidad del trabajo en los sistemas informáticos de juzgados y tribunales.
- Gestión del Cambio: abarca el conjunto de actividades, acciones, iniciativas y tareas relacionadas con la transición y adaptación al nuevo modelo electrónico.

Estos cuatro módulos constituyen la arquitectura global de desarrollo del proyecto. Además, como parte de la definición inicial del proyecto es necesario identificar una serie de elementos relevantes, que por su importancia en el proceso, requerirán de un análisis detallado.

En primer lugar, se parte de la definición del mapa documental, porque el elemento básico es la gestión de la información de los órganos judiciales y fiscales, y por tanto es prioridad identificar de forma correcta la información a gestionar. Un mapa documental facilita el conocimiento y

acceso a la información por parte de todos los integrantes de la organización, y es un instrumento básico además para la gestión de la información. La finalidad de identificar de forma correcta toda la información de los órganos judicial y fiscales es poder llevar a cabo la implantación de la nueva oficina única de registro de los órganos judiciales y fiscales.

En segundo lugar, la digitalización de la información será el primer paso que posibilitará un nuevo modelo de gestión procesal basado expedientes electrónicos. Este proceso de digitalización consta de registro, catalogación, escaneo, conversión a texto si procede y revisión del material digitalizado, y afecta a todos los documentos existentes ya en los órganos judiciales y fiscales, lo cual significa que toda documentación que pertenezca a un expediente que se emita directamente desde un órgano judicial o fiscal se debe incorporar también al expediente electrónico que le corresponde. Además, este proceso de digitalización se hará garantizando que se refleja de forma fidedigna la documentación original en los expedientes electrónicos, y la digitalización se hará de forma certificada, teniendo en cuenta la información de carácter sensible que contienen los expedientes judiciales y fiscales y que debe ser custodiada.

En tercer lugar se encuentra la creación de un registro electrónico de entrada, el cual tiene como función unificar la diversidad de medios y formatos de entrada en un único formato electrónico. Este registro de entrada posibilitará la recepción centralizada de toda la documentación dirigida al órgano judicial o fiscal, ya sea iniciadora de trámite o no, en distintos soportes, y estará interconectada con el sistema de notificaciones y comunicaciones telemáticas de LexNET. Entre las vías de presentación de la documentación puede distinguirse la entrega presencial, vía LexNET, mediante servicios web y presentación de expedientes procedentes de la administración para el orden contencioso administrativo.

En cuarto lugar destaca la existencia de un Gestor Documental, que es un sistema para explotar la documentación almacenada. Este sistema será avanzado en capacidades de estructuración, búsqueda y almacenamiento de la documentación, y tendrá capacidad de crecimiento y

evolución también, tanto en el volumen de documentación a gestionar como en sus funcionalidades. Este Gestor Documental tendrá entre otras las siguientes funcionalidades:

- almacenamiento catalogado y anidado de documentos
- búsqueda simple y búsqueda avanzada
- firma digital de documentos
- búsqueda dentro de un expediente concreto
- compartición de documentos
- ocultación de documentos secreto de sumario a los usuarios no autorizados

Destaca en quinto lugar la integración con el portafirmas corporativo, es decir, la integración que ha de producirse entre el sistema de gestión del expediente judicial electrónico con una plataforma de portafirmas digital que garantice la autenticidad de la documentación y de la firma asociada y a la vez, acelere la tramitación de expediente en las distintas fases que ha de atravesar. El sistema de firma permite entre otras cosas acceder al sistema con seguridad y funciones relacionadas con la gestión de documentos.

En sexto lugar, se encuentra la interoperabilidad con otros órganos judiciales, organismos e instituciones, que es imprescindible para garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema. Es por tanto necesario que se garantice su capacidad de interactuar con otros sistemas de otros órganos judiciales o fiscales, organismos e instituciones. Juega un papel importante en este punto el EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad). La solución final del proyecto de implantación del Expediente Judicial Electrónico también incluye el acceso de profesionales al expediente documental de forma sencilla, eficiente y ágil, para facilitar el trabajo de estos. Y además, también ha de ampliarse a terceras partes como son la prensa, instituciones extranjeras e internacionales y el propio ciudadano como receptor último del servicio público de la Administración de Justicia,

siendo un objetivo a plazo medio el acceso vía telemática de estos al expediente judicial electrónico y a la Administración de Justicia en general.

Siguiendo con esta primera fase de implantación de expediente judicial electrónico, se ha de realizar una definición específica de ciertos elementos de proyecto para evitar ambigüedades y minimizar:

- Dentro de la elaboración del mapa documental se debe obtener una visión completa de la estructura documental de los órganos judiciales y fiscales teniendo en cuenta la tipología de documentos con los que se trabaja, que serán tipos documentales judiciales/fiscales, porque se producen como consecuencia de juicios, procesos o recursos, propios de la actividad del órgano judicial o fiscal y dentro de esta tipología se ha creado un catálogo con 183 tipos diferentes de documentos, organizado alfabéticamente por orden jurisdiccional.

- Uno de los aspectos más importantes a la hora de proceder a la digitalización masiva de documentos es diferenciar aquellos procedimientos que se encuentren vivos en el momento de la implantación de expediente judicial electrónico, de aquellos que no lo estén. Se considera que un expediente está vivo cuando permanece abierto porque necesita ser consultado y actualizado y se encuentra el asunto en trámite. Por el contrario, se considera que un expediente está cerrado o muerto cuando no va a ser actualizado o consultado porque los asuntos de los que trata han sido resueltos o su vigencia ha prescrito. Y dentro de los expedientes vivos se ha de realizar una última distinción, entre aquellos que permanecerán vivos antes de la fecha prevista para la implantación fijada para cada bloque de órganos, y los que morirán antes.

- La toma de requisitos de proyecto consiste en el estudio de la actividad en los órganos judiciales y fiscales, desde varios puntos de vista, tanto organizativo, como procesal, para fijar las nuevas pautas de actuación que se han de desarrollar con la implantación del expediente judicial electrónico y el desarrollo técnico que será necesario para ello.

Pasando a la segunda etapa en la implantación del Expediente Judicial Electrónico, que es la de planificación de la ejecución, se ha de indicar que en esta se incluye todo el conjunto de actividades indicadas como necesarias para la ejecución del proyecto, partiendo desde su definición, como hemos visto anteriormente, hasta su implantación y estabilización.

Para asegurar la correcta planificación y facilitar la ejecución, seguimiento y control, el proyecto global se ha desgranado en planes y proyectos menores, centrados en ámbitos de actuación específicos. En concreto, son 23 proyectos y planes menores principales, que se pueden clasificar en proyectos de carácter general que son 6, proyectos de carácter organizativo principalmente que son 10 y proyectos de carácter predominantemente tecnológico que son 7.

Entre los proyectos de carácter general se encuentran:

- Proyecto de Definición: consiste en identificar todos los elementos del proyecto global, establecer el conjunto de requisitos de la solución final y definir la estructura de ejecución del mismo.
- Proyecto de Gestión de Riesgos y Plan de Contingencias: consiste en la identificación, análisis y caracterización de los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, para elaborar un plan de gestión de estos.
- Proyecto de Coordinación General: consiste en el seguimiento y control del desarrollo del proyecto global para la correcta coordinación y cumplimiento de plazos.
- Proyecto de Implantación: consiste en la realización de las actividades necesarias para el correcto despliegue y establecimiento del expediente judicial electrónico en los órganos judiciales o fiscales, abarcando la totalidad de las fases que completan la implantación de este.
- Proyecto de Preapertura: consiste en el desarrollo de un plan de actuación con las actividades inmediatamente posteriores a la entrada en funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico, para garantizar el correcto arranque del mismo.

- Proyecto de Estabilización: consiste en el seguimiento y control de la implantación del Expediente Judicial Electrónico, proporcionándose soluciones efectivas a las incidencias.

Entre los 10 proyectos de carácter organizativo principalmente destacan:

- Proyecto de Organización del Servicio de Digitalización Diaria: incluye el análisis, dimensionado y definición de este servicio, de acuerdo con las necesidades de gestión diaria de documentación de órgano judicial o fiscal.

- Proyecto de Documentación del Servicio de Digitalización Diaria: consiste en el análisis funcional del servicio de recepción e incorporación en el sistema de la documentación generada diariamente que es de aplicación a cada expediente judicial

- Proyecto de Digitalización Masiva: consiste en la ejecución de un plan de digitalización selectiva y masiva para asegurar que en el momento en que el sistema del Expediente Judicial Electrónico comience a funcionar, cada expediente judicial vigente posea su documentación completa e íntegra.

- Proyecto de Archivo Definitivo de la Documentación: consiste en el archivado físico definitivo de la documentación en papel, y de su recuperación si procede.

Entre los 7 proyectos de carácter predominantemente tecnológico cabe destacar:

- Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones: consiste en el desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para el funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico

- Proyecto de Adecuación Tecnológica de Sedes: consiste en la adecuación de infraestructuras tecnológicas, como son instalaciones o equipos informáticos, de las sedes de los órganos judiciales o fiscales para la implantación del sistema del Expediente Judicial Electrónico.

- Proyecto de Adecuación del Puesto de Trabajo: consiste en la preparación y provisión de los puestos de trabajo para que puedan acceder

al sistema del Expediente Judicial Electrónico tanto desde la sede del órgano judicial o fiscal como desde fuera de esta, permitiéndose así el teletrabajo según proceda.

- Proyecto de Ejecución de Pruebas Piloto: consiste en el diseño, ejecución y evaluación de las pruebas piloto de validación de funcionamiento del sistema del Expediente Judicial Electrónico en un entorno real en una sede judicial o fiscal.

7. APLICACIÓN REAL DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Se puede apreciar la puesta en marcha de estos proyectos anteriormente mencionados en relación con la Audiencia Nacional y en concreto con la Sala de lo Social, que desde el 14 de Junio de 2011 se ha convertido en el primer órgano judicial en el que ha desplegado el Expediente Judicial Electrónico, del siguiente modo:

Respecto de los proyectos de carácter general:

- En relación con el Proyecto de Definición: puesto que el nivel de incertidumbre en la implantación del Expediente Judicial Electrónico es muy alto, se considera conveniente que el proceso de definición de los requisitos y de las prestaciones de este no finalicen con un proyecto de definición inicial sino que se prolonguen a medida que avanza el desarrollo del proyecto global. Son dos elementos fundamentales en este proceso la alineación de las prestaciones del nuevo sistema con las necesidades de los usuarios, y además la implicación de estos en el proceso de cambio.

- En relación con el Proyecto de Gestión de Riesgos y Plan de Contingencia: es necesario establecer un proyecto específico de gestión de riesgos y de defunción de planes de contingencia como consecuencia de las desviaciones en la programación y del efecto de estas en los resultados del proyecto.

- En relación con el Proyecto de Coordinación General: el Grupo Técnico de Implantación que se creó ad hoc para esta tarea quedó

constituido por diversos representantes entre los que se encuentra el Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, o el Subdirector General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. Para asegurar la correcta coordinación del proyecto, se han de promover reuniones de seguimiento e intercambio de información a varios niveles, no solo a nivel directivo sino también operativo, y también la designación de responsables específicos de cada área.

- En relación con el Proyecto de Implantación: dada la envergadura de la Audiencia Nacional la implantación del expediente judicial electrónico requerirá de un proyecto de implantación específico, con unas fases correctamente definidas, periodos entre las diversas fases y planificación de los recursos humanos y materiales acordes a la disponibilidad que exista.

- En relación con el Proyecto de Preapertura: la agilidad que se ha dado en cada uno de los despliegues realizado en la implantación del expediente judicial electrónico y la adecuada participación de todas las partes implicada ha garantizado el éxito de cada etapa de transición, lo cual además ha permitido dar una respuesta rápida y a tiempo a cada actividad de preapertura.

Respecto de los proyectos de carácter organizativo:

- En relación con el proyecto de Servicio de Digitalización Diaria: la clave del éxito de este proyecto son los puestos de trabajo que lo componen. Existen por tanto, Secretario Judicial de los Servicios de Recepción, Digitalización y Archivo, Secretario Judicial del Servicio de Catalogación. Y además, existen puestos asociados a los servicios prestación en el Servicio Común, como el Tramitador procesal de Recepción, Documentalista, Tramitador procesal de Digitalización, Tramitador procesal de Catalogación.

El análisis detallado de la distribución de puestos de trabajo más eficaz para cada una de las fases de la implantación del expediente judicial electrónico ha permitido la optimización de la etapa de transición del modelo en papel al modelo electrónico, y ha permitido la identificación de acciones

de reconfiguración o adaptación de los medios o puestos durante esta, con la suficiente antelación.

➤ En relación con el proyecto de Digitalización Masiva: la disponibilidad tanto de los centros de catalogación y de digitalización de acuerdo con la demanda de cada momento ha permitido el arranque del funcionamiento de este proyecto.

Asimismo, para favorecer la correcta catalogación del gran volumen de documentación que es objeto de este proyecto es importante estandarizar y unificar los criterios de los mecanismos de asignación de sus metadatos.

Este proyecto finaliza con la certificación de la correcta carga y acceso a toda la documentación en el nuevo sistema de Expediente Judicial Electrónico.

➤ En relación con el proyecto de Formación y Aprendizaje: en 2011 el Ministerio de Justicia inicio un Plan de Formación dirigido a magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, que tendrían que trabajar con el expediente judicial electrónico, para que adquiriesen los conocimientos adecuados para desempeñar sus funciones en el nuevo espacio de trabajo. Se ha impartido tanto formación en Minerva como en la firma electrónica.

Este Plan de Formación se ha llevado a cabo coordinándose el Consejo General del Poder Judicial, con diversas subdirecciones, como la Subdirección general de Nuevas Tecnologías de la Justicia, o la Secretaria de Gobierno propia de la Audiencia Nacional.

La rapidez en la organización de las actividades de formación y la implicación de los usuarios ha permitido la adaptación de estos al calendario de desarrollo de proyecto global

Respecto de los proyectos de carácter predominantemente tecnológico:

- En relación con el proyecto de Integración Tecnológica: este proyecto se considera independiente pero complementario al Proyecto de Desarrollo, y permitirá el establecimiento de una única autoridad de integración, con una visión global del sistema, y con la capacidad de fijar estándares u unificar directrices.

Este proyecto ha de iniciarse antes que cualquier otro proyecto de contenido tecnológico, para que quede en primer lugar definida totalmente la arquitectura global del sistema y se asegure coherencia entre todas las aplicaciones desde el inicio del proyecto.

- En relación con el Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones: si bien se puede afirmar que el desarrollo de cada una de las aplicaciones que componen en Expediente Judicial Electrónico pueden tratarse como un subproyecto independiente del resto, es importante un trabajo de integración en relación con el proyecto global, para potenciar la comunicación e intercambio de información entre los diferentes equipos de desarrollo.

Este proyecto estará tutelado por el Proyecto de Integración Tecnológica.

- En relación con el Proyecto de Adecuación del Puesto de Trabajo: es trascendental para lograr la estabilización del nuevo sistema configurar los equipos de usuario, aunque, más allá de los errores o limitaciones de configuración de equipo, resulta crítico el impacto que estos pueden ocasionar en la estabilización por no tenerlos identificados.

Por tanto, resulta fundamental asegurar la perfecta distribución de la configuración de equipos requerida, unificando parámetros y componentes, en la totalidad de los equipos de usuarios.

➤ En relación con el Proyecto de Apoyo al Usuario y Resolución de Incidencias: es importante la eficaz resolución de incidencias desde el momento de la puesta en marcha real y efectiva del nuevo sistema, para asegurar su rápida estabilización.

Puesto que el Expediente Judicial Electrónico entraña una gran complejidad tecnológica es conveniente crear grupos de trabajo específicos por tipología de incidencias tecnológicas para abordar la resolución de estas y además, para eliminar la causa de la incidencia, así como las consecuencias o efectos generados.

Las actuaciones de estos equipos comprenderán tanto acciones de carácter paliativo, consistentes en la atenuación de los efectos de la incidencia, como acciones de carácter correctivo, consistentes estas en la eliminación de la causa origen de la incidencia, y acciones de carácter preventivo, consistentes en la eliminación de posibles incidencias semejantes en el resto del sistema.

Así pues, el despliegue del Expediente Judicial Electrónico comenzó en la Sala de lo Social y en el nuevo Servicio Común de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo. Continuo en los Juzgados Centrales de lo Administrativo, pasando por la Sala de lo Contencioso Administrativo, y finalizando en los Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgados Centrales y Sala de lo Penal, Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y Juzgado Central de Menores.

En lo que se refiere a provincias, en una primera fase que finalizó en Julio de 2016 se implantaba en todas las capitales de provincia con competencias no transferidas en materia de Justicia, así como en los partidos judiciales de Cartagena, Ibiza y Ponferrada.

En una segunda fase, que se llevó a cabo a finales de 2016 se extendió a las sedes judiciales de Talavera de la Reina, Mérida y Puertollano, además de Palma de Mallorca, Murcia y Valladolid.

Y en una tercera fase, que se inició en 2017 y se completará a finales de 2018, se implanta en el resto de partidos judiciales del territorio, en el Tribunal Supremo en sus cuatro salas al completo, y en la Audiencia Nacional en sus dos restantes salas. En esta tercera fase se hace más compleja su implantación debido a la dispersión geográfica y el gran número de sedes.

8. VENTAJAS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO

El Expediente Judicial Electrónico busca facilitar el acceso de todos los intervinientes judiciales a la misma documentación, para evitar así tener que realizar copias en papel de todos los procedimientos.

Su implantación permitirá eliminar papel en los procesos judiciales, lo cual incrementará la rapidez en los procesos judiciales, la celeridad en la tramitación de procedimientos y además garantizará la seguridad durante todo el proceso, así como mejorar el ejercicio del derecho de defensa.

El éxito del Expediente Judicial Electrónico va a permitir que la sociedad española disfrute de una justicia más ágil, transparente y sostenible, comprometida con el ciudadano.

Las ventajas de la tramitación electrónica son muchas y muy variadas:

-En primer lugar, la ventaja más evidente de todas será el ahorro de papel que se va a conseguir con la transformación de toda la documentación a formato electrónico. En los últimos años se ha triplicado el uso de papel en los juzgados, ello unido a los gastos de impresión que conlleva la documentación en formato físico.

-En segundo lugar, se producirá un importante ahorro de espacio de almacenaje, tanto de expedientes vivos, como de expedientes cerrados. Los expedientes vivos se transformarán a formato electrónico, y los expedientes cerrados desaparecerán.

-En tercer lugar, una importante ventaja será el ahorro en costes administrativos en la Administración de Justicia, pues con la implantación del Expediente Judicial Electrónico, cualquier interviniente en el proceso, ya sea juez, fiscal, abogado, procurador etc. podrán acceder desde cualquier lugar a la documentación del procedimiento, y asimismo, se reducirán los tramites de presentación de documentación, los cuales, actualmente ya se pueden realizar de forma telemática.

-En cuarto lugar, mayor celeridad en la realización de trámites, la cual ya se había logrado en parte con el Punto Neutro Judicial y el acceso a información en tiempo real. Con la implantación del Expediente Judicial Electrónico este acceso será más completo y rápido.

-En quinto lugar, se va a lograr mayor celeridad en el auxilio judicial, al ser mucho más sencillo el acceso a la documentación del proceso desde cualquier punto, sin ser necesario ya el traslado físico de esta de una sede judicial a otra.

-En sexto lugar, se reducirán hasta el punto de desaparecer los desplazamientos de profesionales, ciudadanos y funcionarios.

-En séptimo lugar, disponibilidad del expediente para los profesionales que intervengan en él en cualquier momento.

-En octavo lugar, mayor facilidad en la presentación y traslado de documentos.

-En noveno lugar, mayor facilidad para el personal de las Administración de Justicia, en su trabajo de transporte, archivo y recuperación de datos.

-En décimo lugar, un indudable incremento de la seguridad y rapidez de los procedimientos, y a la vez, se permitirá un seguimiento informatizado en tiempo real de la tramitación.

-En undécimo lugar, con la implantación del Expediente Judicial Electrónico se va a lograr una Administración accesible desde múltiples

canales, las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma más cómoda y cercana.

-En duodécimo lugar, se mejorará la coordinación entre órganos judiciales y fiscales, y entre tribunales, juzgados, servicios comunes y con otras Administraciones también.

En concreto, todos estos beneficios se verán reflejados en una mejora global del servicio público que se presta desde la Administración de Justicia y, adecuándose a las previsiones que en la Ley 18/2011 se contienen se conseguirá:

- Una justicia más accesible, tanto para los profesionales ligados de forma directa al ámbito judicial como para el ciudadano.
- Una justicia más transparente, facilitándose el acceso a su documentación.
- Una justicia más ágil, en la que se tramitará todo en formato electrónico, lo que significa que se acortarán enormemente los plazos de tramitación.
- Una justicia más eficiente, asignándose mejor los recursos que están disponibles de forma limitada.
- Una justicia más sostenible, tanto ecológicamente como económicamente, reduciendo el consumo de papel y los costes asociados a esto, como los costes de impresión.
- Una justicia mejor interconectada, favoreciendo el intercambio de información y la comunicación entre órganos judiciales y fiscales, y entre otras instituciones y otros órganos de la Administración.

9. INCONVENIENTES DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO

Son innumerables las múltiples ventajas que la implantación del Expediente Judicial Electrónico conlleva, pero no podemos dejar apartados los inconvenientes que este puede presentar también.

En primer lugar, el riesgo que existe de que las nuevas tecnologías compliquen el acceso a la Justicia: esta situación puede darse porque muchos ciudadanos aun no utilizan las herramientas informáticas, y muchos de quienes si las utilizan, encuentran diversos problemas a la hora de comprender los programas informáticos.

En segundo lugar, el desconocimiento que existe en materia jurídica, que puede hacer surgir problemas a la hora de seleccionar el formulario correcto, solicitar o no asistencia de letrado etc.

En tercer lugar, es obvio que la dependencia total que este sistema crea respecto de las redes informáticas, puede dar ciertos inconvenientes cuando estas, no funcionen y den fallos en cualquier momento. Es decir, que hemos de estar preparados para que un día la red informática no funcione, o exista una avería eléctrica, o incluso se dé la situación de que se produzca un borrado accidental de datos por un funcionamiento incorrecto de los sistemas.

Por tanto, el uso de nuevas tecnologías no está exento de diversos problemas, y aunque su uso es un avance necesario en la sociedad, y exista previsión de muchos de estos problemas, hay que tener en cuenta que pueden darse situaciones que supongan retraso en la Justicia, y que se tendrán que solventar de la manera más rápida y eficaz.

10. PLAN E-JUSTICIA EN LA UNION EUROPEA

Se entiende por E-Justicia la utilización de las nuevas tecnologías por la Administración de Justicia, o dicho de otra manera quizá más acertada y concreta, la utilización de estas en el ejercicio de la actividad de los órganos jurisdiccionales.

Es importante acotar el término nuevas tecnologías, ya que estas están en constante cambio y evolución, y hay que señalar que la E-justicia es el recurso en el ámbito de la actividad jurisdiccional a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las TIC son las tecnologías de carácter

electrónico, que descansa en la utilización de herramientas informáticas, y especialmente en internet.

La E-justicia no es una Administración de Justicia que se funda en la electrónica y en el trabajo de máquinas sobre la base de programas electrónicos, ni se presenta como una alternativa a una Administración de Justicia realizada por seres humanos. Sino que se ha entender por herramientas de E-justicia las herramientas informáticas creadas para ser utilizadas por los órganos jurisdiccionales en el desarrollo de su actividad.

Se entiende por tanto que no cambia ni la naturaleza ni la función de los órganos jurisdiccionales por el hecho de servirse de herramientas nuevas, ya que lo único que cambia es la configuración externa de la actividad que se va a desarrollar de forma electrónica.

La E-justicia comparte con la E-administración o E-government la utilización al máximo nivel de rendimiento posible de las TIC, en el desarrollo de una tarea publica compleja y que implica la participación de varios sujetos.

Se ha de separar en dos planos diferentes dos conceptos diferentes también. En primer lugar, en que consiste la E-justicia, ya definido anteriormente, y en segundo lugar, que se pretende con ella, para qué sirve la E-justicia:

- Se pretende lograr mayor eficacia de la Justicia, desarrollándose su actividad en menos tiempo, con menos coste pero sin perder calidad en el servicio que se presta.

- Se pretende modernizar la Justicia a través de las TIC, no con el fin de llegar a lo más alto de la vanguardia de la tecnología, sino estar a la altura de los tiempos y a lo que la sociedad demanda.

- Se pretende dar un servicio más transparente de la Justicia.

Tras dejar claro en que consiste la E-justicia y que se pretende con ella, se ha de analizar que supone añadir el adjetivo “europeo” a la noción de E-justicia. Con el adjetivo europeo se hace referencia al conjunto de acciones que pueden desarrollarse por las instituciones comunitarias y por los Estados

Miembros de la Unión Europea, de cara a la utilización de las TIC en la Administración de Justicia, enfocándose en un plano europeo, y creándose herramientas específicas y fomentándose su utilización.

Se entiende por plano europeo aquellos ámbitos de la actividad de la Administración de Justicia respecto de los cuales ostentan competencias las instituciones europeas.

Las competencias de la Unión Europea en materia de E-justicia han de vincularse, una vez entrado en vigor el Tratado de Lisboa, a la constitución de la Unión Europea entendida esta como un espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como se recoge en el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 3 y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se trata pues de un ámbito en que se comparten competencias entre la Unión Europea y los Estados Miembros, de modo que la Unión Europea podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. De forma más específica, se ha de indicar que un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia pasa por la cooperación materia civil y en materia penal:

- En materia civil: la Unión Europea es competente para desarrollar la cooperación judicial en asuntos con repercusión transfronteriza.
- En materia penal: las competencias de la Unión Europea se centran en la consecución de objetivos vinculados con la persecución de delincuencia transfronteriza y cooperación judicial, y para hacerlo se confiere a las instituciones europeas potestad normativa para establecer unas normas mínimas a través de directivas en ciertos ámbitos.

La actuación de las autoridades europeas en materia de E-justicia en el contexto correspondiente indicado anteriormente tiene por tanto un objetivo claro que es dotar de mayor eficacia a su propia acción normativa e institucional, para crear un espacio europeo de justicia. Dentro de este ámbito, del espacio Europeo de Justicia, existen dos sectores en los cuales las herramientas de E-justicia son especialmente importantes para alcanzar las metas fijadas y que coinciden además siendo aquellos en los que más intensa será la actividad de las instituciones europeas, y son los siguientes:

- En primer lugar, se encuentra el acceso a la justicia en los procesos judiciales de dimensión transfronteriza, que se encuentra especialmente relacionado con las competencias de las instituciones europeas para garantizar la tutela judicial efectiva en materia civil, la eliminación de obstáculos para el buen funcionamiento de los procesos civiles y el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios.

Por acceso a la justicia en procesos judiciales de dimensión transfronteriza se entiende desde el acceso del justiciable a información acerca del ordenamiento jurídico y funcionamiento del sistema judicial del Estado extranjero en el que tal vez tenga que litigar, pasando por la obtención de asesoramiento antes de decidir si incoar un litigio en el extranjero, disfrute de asistencia jurídica gratuita, hasta obtención de ayuda para superar las dificultades causadas por una lengua diferente.

- En segundo lugar, se encuentra el desarrollo de instrumentos normativos a través de los que se dota a la cooperación judicial en materia civil y en materia penal.

Por tanto, como se puede apreciar, el campo de actuación de las instituciones europeas se encuentra claramente acotado, y en ningún caso se encuentran facultadas para adoptar medidas que incidan directamente en la organización y funcionamiento interno de los sistemas judiciales de cada Estado Miembro. Pero, es importante aclarar que la acción europea en materia de E-justicia sí que puede producir efectos sobre las legislaciones procesales nacionales, especialmente en el modo en que se desarrolla el trabajo en los órganos judiciales:

- ✓ Por un lado, es evidente que para poder cumplir con las exigencias relacionadas con la implantación de la E-justicia, los Estados miembros han de cubrir a nivel interno ciertos estándares mínimos de informatización y uso de las TIC en la Administración de Justicia.

- ✓ De otro lado, supondría una contradicción que un Estado miembro reservara el empleo de las herramientas de la E-justicia

para los ámbitos de acción europea pero no en los ámbitos puramente internos.

✓ Además, puesto que los Estados miembros han de disponer de herramientas de E-justicia, y han de ser compatibles con las establecidas desde instancias europeas para hacer posible la cooperación internacional, se acabara produciendo un efecto armonizador.

El interés de las instituciones europeas en la E-justicia es bastante reciente, y hasta no hace mucho tiempo, las actuaciones realizadas han sido dispersas y en focos muy diversos.

En cuanto al desarrollo actual de la E-justicia en la Unión Europea, y al margen de los resultados que produzcan los planes de acción aprobados y los que se aprueben en el futuro, actualmente existen ya diversas herramientas de E-justicia europea. Algunas aplicaciones de las TIC ya están al servicio del espacio europeo común de justicia por ejemplo. Estas herramientas conviven con otras que se fundan en el uso de las TIC y que están vinculadas en cierto modo al ámbito jurídico y al ejercicio de los derechos, aunque no guardan relación directa con el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

El punto de partida para la creación de herramientas de E-justicia europea han sido los trabajos desarrollados para promover la implantación del e-government en el ámbito de la Unión Europea. Se han llevado a cabo, y a día de hoy aún se siguen llevando a cabo trabajos de carácter técnico, que han servido para poner en marcha tanto herramientas de E-gobierno como de E-justicia. Son especialmente importantes los cuya finalidad es establecer estructuras seguras y permitir la autenticación de documentos.

En concreto cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo por el IDABC, que se encargan de la prestación interoperable de servicios de e-gobierno en Europa para Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos. Este es un programa dependiente de la Dirección General de Informática de la Comisión Europea, cuya finalidad es promover y

apoyar la prestación de servicios públicos transfronterizos a ciudadanos y empresas en Europa, además de impulsar y mejorar la eficiencia y colaboración entre Administraciones Públicas europeas.

El IDABC tiene su origen en 1995, y fue pionero en la introducción de las TIC en la Administración pública europea. Con el tiempo se han ido modificando su contenido y funciones hasta convertirlo en el Programa E-Government de la Unión Europea. Entre los múltiples frentes de actividad que tiene abiertos el Programa IDABC actualmente, destacan especialmente los siguientes:

- ✓ En primer lugar, los trabajos para la creación de un Marco de Interoperabilidad Europeo, pensado para hacer posible el trabajo transfronterizo de las Administraciones Públicas de los Estados Miembros entre sí y con las Administraciones públicas europeas.
- ✓ En segundo lugar, los trabajos en materia de firma electrónica y en identidad electrónica a través de los cuales se busca una estandarización total de los sistemas, para que puedan ser reconocidos los mecanismos de firma e identificación electrónica en los demás Estados miembros y por la instituciones europeas.

Entre las herramientas que se han creado por el Programa IDABC destaca especialmente por su cercanía al espacio de E-justicia la Red SOLVIT, que comenzó a funcionar en 2002 con el fin de solucionar los problemas transfronterizos entre empresas y ciudadanos por un lado, y por otro, entre Administraciones Públicas de la UE con Administraciones Públicas de otros Estados Miembro. En cada Estado Miembro así como en Noruega, Islandia y Liechtenstein hay un Centro SOLVIT, que forma parte de su Administración y presta ayuda de forma gratuita. La Red SOLVIT constituye un mecanismo alternativo de solución de conflictos, tendente a evitar la incoación de un proceso judicial.

Centrándonos en las herramientas de E-justicia actualmente existentes, son las siguientes:

▪ La Red Judicial Europea en materia Civil y Mercantil: fue creada en 2001, con la finalidad de hacer más efectiva la litigación transfronteriza en materia civil y mercantil. El objetivo general de esta red se puede concretar en dos finalidades más concretas, que a su vez están interrelacionadas, y son:

- ✓ De un lado, facilitar la cooperación entre autoridades judiciales en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil.
- ✓ De otro lado, establecer un sistema de información al público sobre cooperación judicial en materias civil y mercantil, y con carácter general sobre los sistemas judiciales de los Estados miembros.

Para alcanzar esos objetivos se diseñó esta Red como un conjunto de personas que trabajan en equipo, donde destaca en protagonismo los denominados “puntos de contacto centrales”, designados por los Estados miembros. Se pueden integrar en la Red las autoridades nombradas en virtud de instrumentos comunitarios o internacionales para la realización de tareas de cooperación judicial entre los Estados miembros, en los que destacan los denominados “magistrados centrales de enlace”.

Los puntos de contacto centrales son la clave del funcionamiento de esta Red, ya que proporcionan información y facilitan la tramitación de las solicitudes de cooperación, buscan también solución a las dificultades.

Teniendo en cuenta que la Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil se entiende como un conjunto de personas que trabajan de forma coordinada, no puede afirmarse que esta sea una verdadera modalidad de E-justicia, pero si se considera E-justicia las herramientas creadas por la Red para cumplir con sus funciones. Para ello se han creado dos portales en internet:

- Existe en primer lugar un Portal general de la Red, cuyo objetivo consiste en el suministro de información acerca de múltiples facetas del sistema jurídico y judicial de los Estados miembros de la Unión Europea e incluso en un plano internacional.
- Dentro del Portal general de la Red existe un enlace que da paso a otra herramienta básica en E-justicia europea, que es el Atlas Judicial Europeo en Materia Civil, que permite acceder a información

relevante para la cooperación judicial en materia civil, al tiempo que ofrece herramientas útiles para utilizar esa cooperación y servirse además de los procesos europeos existentes.

- La Red Judicial Europea (en Materia Penal): con la expresión Red Judicial Europea se hace referencia a una estructura humana que desarrolla funciones exclusivas del ámbito de cooperación penal. Está compuesta por un conjunto de personas de cada Estado miembro, cuyo objetivo principal es facilitar la cooperación judicial en materia penal para luchar contra las formas más graves de delincuencia en ámbito transfronterizo especialmente.

Existen en esta Red puntos de contacto centrales como intermediarios activos, que se encontraran a disposición de las autoridades judiciales locales, de otras autoridades competentes de su Estado miembro, de los puntos de contacto de otros Estados miembro y de las autoridades judiciales locales y otras autoridades competentes de los demás Estados miembro, para que se establezcan contactos directos más apropiados.

Esta Red, como ocurría con la paralela en materia civil y mercantil, resulta ajena a la noción de E-justicia, pero la propia Decisión que regula esta Red reconoce que uno de sus objetivos es proporcionar de forma permanente determinada información básica actualizada y ese frente sí que encaja con la noción de E-justicia. En concreto, la Secretaria de esta Red pondrá a disposición de los puntos de contactos y las autoridades judiciales competentes la siguiente información:

- a) Datos completos de los puntos de contacto en cada Estado miembro.
- b) Un instrumento de tecnología de la información que permita a la autoridad requirente o emisora de un Estado miembro identificar a la autoridad competente de otro Estado miembro que reciba y ejecute su solicitud de cooperación judicial.

c) Información jurídica y practica concisa relativa a los sistemas judiciales y procesales de los Estados miembros

d) Los textos de los instrumentos jurídicos pertinentes y en lo referente a los convenios en vigor, el texto de las declaraciones y reservas.

▪ La interconexión de los registros europeos de antecedentes penales: el también denominado ECRIS (Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales es una verdadera herramienta de E-justicia. La Decisión a partir de la cual se crea lo define como un sistema descentralizado de tecnología de la información fundado en las bases de datos de los registros de antecedentes penales de cada Estado miembro. Es decir, es un sistema electrónico de intercambio de información procedente de los registros de antecedentes penales, respecto de los delitos y sus condenas. Su funcionamiento se basa en dos elementos:

- En primer lugar, un programa informático de interconexión que permita el intercambio de información entre las bases de datos de los registros de antecedentes penales de los Estados miembros.
- Una infraestructura común de comunicación que proporciona una red cifrada.

El ECRIS no es por tanto una base de datos centralizada puesto todos los datos de los registros de antecedentes penales se seguirán almacenando únicamente en bases de datos manejadas por los Estados miembros, sin que exista acceso directo en línea.

Además de estas, existen también otros desarrollos con una vinculación más indirecta a la noción de E-justicia:

✓ La Red de Presidentes de Tribunales Supremos de Europa: se trata de una Asociación de los Presidentes de Tribunales Supremos, que se constituyó en 2004 contando con el apoyo de la Comisión Europea. Esta Red es un foro a través del cual las instituciones pueden

solicitar la opinión de los Tribunales Supremos, además de acercarlos y animarlos a debatir y a intercambiar ideas.

En 2006 se creó un portal de jurisprudencia, financiado también por la Comisión Europea, que permite acceder a las bases de datos de todos los Estados que publican jurisprudencia de los Tribunales Supremos. Este portal funciona como un distribuidor.

✓ La Red Notarial Europea y el Registro Europeo de Testamentos: se trata de una iniciativa promovida por el Consejo de los Notariados de la Unión Europea, fuera de los límites de la noción de E-justicia pero dentro de lo que puede considerarse acceso electrónico al Derecho. Esta Red permite el intercambio de información y de documentos entre notarios en asuntos transfronterizos.

✓ El Registro Europeo de Empresas: se trata de una red que agrupa a los Registros Mercantiles y entidades similares de los Estados Miembros. A través de este Registro se puede obtener información oficial y compararla con la de otros Estados conectados, a un precio razonable.

Hasta este momento se ha tratado como se ha venido actuando en relación con la E-justicia en la Unión Europea, pero es de vital importancia conocer las líneas de actuación de cara al futuro.

Hay que matizar que lo realizado hasta la fecha no responde al seguimiento o ejecución de una estrategia de las instituciones europeas en materia de E-justicia, ya que las dos redes judiciales europeas, tanto en materia civil y mercantil, como en materia penal, así como el empleo de las herramientas TIC responden a exigencias para cumplir sus propios objetivos, y se trata de algo que solo busca incrementar la eficacia a la hora de difundir información y de instrumentar la cooperación.

Sin embargo, las Instituciones Europeas ya han decidido actuar de cara al futuro de forma planificada, para organizar y programar los pasos a dar en E-justicia.

Las Instituciones Europeas parten de una premisa que establece su labor en tres ejes, sobre los que se centraran sus principales planes de actuación:

- El acceso a la justicia en procesos transfronterizos: la puesta en funcionamiento de un portal en internet es el objetivo principal de las instituciones europeas. Este Portal de E-justicia se ha de entender como una página web que dará cobertura a todas las informaciones y todos los servicios que se pueden obtener en línea respecto de las materias en las que las instituciones europeas ostentan competencias.

Su finalidad será la de facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y de las empresas en Europa que se vean inmersos en litigios transfronterizos.

Existirán en este Portal dos niveles, uno abierto a todos los ciudadanos y un segundo nivel de acceso restringido únicamente para los profesionales jurídicos.

El Portal proporciona la información a los ciudadanos en su lengua, sobre los sistemas y procedimientos judiciales vigentes en cada Estado.

Además también proporciona información adicional de índole práctica, como por ejemplo, los medios para formular una demanda o petición, o acerca de la determinación del tribunal competente para conocer de un litigio, o los procedimientos para obtener asistencia jurídica gratuita.

El Portal actúa también como una guía para orientar a los ciudadanos hacia otros sitios web que proporcionan también información

jurídica, como Eur-lex, Pre-lex, hacia las Instituciones Europeas o hacia instrumentos creados por ellas.

Así pues, el Portal debe dar acceso a todo el sistema de la justicia en red europea, pero no solo puede constituir un conjunto de enlaces, sino que ha de aportar contenidos y utilidades propios, y en esta línea de enriquecer las utilidades del Portal, el Parlamento Europeo ha formulado una propuesta, que refuerza esa concepción de que el Portal no es solo una vía de acceso a información, sino que también presta servicios de asesoría jurídica para ciudadanos y empresas ante problemas jurídicos transfronterizos.

En relación con el acceso de empresarios a este Portal, se hace referencia a establecer mecanismos de identificación electrónica y de firma electrónica. Este segundo nivel será utilizado por jueces, funcionarios judiciales, así como por abogados, y sirve para acceder a bases de datos jurídicas, a registros nacionales, pero a la vez su función es constituir una comunicación segura, y permitir la notificación o intercambio de documentos entre tribunales o entre tribunales y partes del proceso.

- La mejora de la cooperación judicial civil y penal: se proponen las instituciones europeas lograr la mejora de la cooperación judicial civil y penal mediante el fomento de la utilización de las herramientas de TIC.

Se trata de avanzar en los trabajos ya desarrollados, que son las dos Redes Judiciales Europeas y Eurojust, reforzándose la capacitación de los profesionales jurídicos también para servirse de estas herramientas.

Existen por tanto, varias líneas de actuación:

✓ En primer lugar, perseguir la interconexión de los registros de antecedentes penales: es decir, lograr que el sistema ECRIS se plenamente operativo. Además, se pretende también ampliar el intercambio de información a los nacionales de los Estados terceros que sean objeto de condenas penales.

✓ En segundo lugar, crear una red segura para el intercambio de información entre autoridades judiciales

✓ En tercer lugar, facilitar el recurso a la videoconferencia: potenciándose su uso, y explotando las múltiples ventajas que esta aporta en cuanto a costes económicos y reducción de tiempo. Se utiliza mucho en algunos países, en procesos judiciales internos, no obstante apenas se aprovecha en asuntos transfronterizos, muy probablemente por razones lingüísticas.

En este sentido, las instituciones europeas pretender sensibilizar a las autoridades judiciales para que utilicen estas nuevas tecnologías en procedimientos civiles y penales transfronterizos.

De manera especial, se pretende trabajar en aspectos técnicos que permitan una interoperabilidad europea

El desarrollo y máxima eficacia de los procesos civiles europeos: en el contexto más específico de los procesos civiles se plantean las siguientes acciones:

- De un lado, fomentar la utilización de servicios para formular en línea reclamaciones de consumo y, especialmente, diseñar sistemas de mediación en línea también en la línea del consumo.

- Por otro lado, desmaterializar los procesos europeos, de modo que puedan tramitarse íntegramente de forma telemática: potenciándose el acceso a formularios y presentación de solicitudes a través del portal E-justicia, pero también a través de las notificaciones electrónicas.
- Además, se pretende tecnificar los reglamentos sobre obtención de prueba y sobre práctica de notificaciones en el extranjero: esto se debe a que las TIC no forman parte de los dos Reglamentos sobre los que se articula la asistencia judicial en materia civil.

Para concluir con el Plan E-justicia de la Unión Europea, es necesario precisar que una de las desventajas que existen en la litigación transfronteriza es el idioma, que puede ser superada con ayuda de la traducción o interpretación. El multilingüismo es una de las principales dificultades para crear un verdadero espacio judicial europeo, dado que los procesos judiciales se desarrollan como regla general en la lengua nacional.

En concreto, en relación con esta barrera se plantean tres aplicaciones distintas:

I. El desarrollo de herramientas de traducción automática: si bien estos programas no son perfectos y presentan errores, es cierto que permiten acceder a un conocimiento superficial del contenido de un documento redactado en otra lengua.

II. Una base de datos de traductores e intérpretes jurados: en ocasiones no resulta sencillo al litigante acceder a un traductor o intérprete, de modo especial en lenguas poco usuales en el Estado del foro. Para hacer desaparecer esta dificultad se contempla la creación de una base de datos europea sobre traductores e intérpretes juradas, especialmente cualificados en el ámbito judicial, a la que se pueda acceder con sencillez, a través del Portal E-justicia.

III. Formularios en línea que permitan traducciones automáticas

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Si bien el Expediente Judicial Electrónico ha de entenderse como un medio y no como un fin en si mismo, y es evidente que constituye una herramienta fundamental para el trabajo, tanto de jueces como magistrados, su implantación ha dado lugar a diversos y graves problemas a los que se ha de dar solución en el menor tiempo posible.

Relacionado con estos problemas a los que se hace alusión, se han realizado diversas propuestas, en concreto procedentes de los presidentes de las Audiencias Provinciales, y son las siguientes:

1. En primer lugar, se solicita que en todo el territorio nacional haya una sola aplicación de gestión procesal, y un único modelo de Expediente Judicial Electrónico. En concreto, esta petición se debe a que existe una situación de diversidad de aplicaciones y modelos del Expediente Judicial Electrónico, que han de hacerse compatibles.

2. En segundo lugar, se solicita que el Consejo General del Poder Judicial ejerza de líder en este proceso de implantar el Expediente Judicial Electrónico, instando a todas las Administraciones Públicas competentes a que desarrollen con la mayor urgencia posible un Expediente Judicial Electrónico de calidad, y que realicen por tanto las inversiones necesarias en medios humanos y materiales.

3. En tercer lugar, se solicita también al Consejo General del Poder Judicial que establezca las condiciones mínimas que debe tener una aplicación judicial para que se pueda prescindir de los expedientes que se encuentran en soporte papel. Por condiciones mínimas, según los presidentes de las Audiencias Provinciales se entienden las siguientes:

- Que la aplicación informática tenga un índice electrónico, como se recoge en la ley 18/2011 en su artículo 26.3

- Que la aplicación informática tenga un visor de documentos y un buscador también
- Que los jueces y magistrados dispongan de una doble pantalla o una herramienta similar, además de un ordenador portátil para poder trabajar fuera de la sede judicial
- Que los magistrados y jueces dispongan de acceso remoto a la aplicación informática fuera de la sede judicial.

4. En cuarto lugar, se considera conveniente por los presidentes de las Audiencias Provinciales, que hasta que no se den por completo las condiciones anteriores, existan las instrucciones necesarias para que los expedientes se envíen a otros órganos judiciales en soporte papel aun.

5. En quinto, y último lugar, se solicita a las administraciones públicas competentes el apoyo técnico suficiente para solucionar los problemas e incidencias que surjan en cada momento.

Por último, y en relación con la Oficina Judicial, se entiende que se ha de definir un único sistema de Oficina Judicial a implantar en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que este proceso se lleve a cabo de modo progresivo, y adaptándose por supuesto a las características particulares de cada partido u Órgano Judicial.

En definitiva, la implantación del Expediente Judicial Electrónico, a pesar de todo el trabajo que conlleva a lo largo del tiempo hasta su completa implantación, para que funcione plenamente, y desaparezca el soporte papel de los órganos judiciales y fiscales, se puede extraer como conclusión que este traerá metas innovadoras, adaptadas a las necesidades del siglo en el que nos encontramos, tanto de los ciudadanos, como de jueces, magistrados y fiscales. Además, dotará de seguridad y rapidez los procesos, permitiendo el acceso a los expedientes de los procedimientos desde cualquier lugar, sin necesidad de recurrir a personal de la administración de Justicia.

Con el Expediente Judicial Electrónico se está logrando un servicio de Justicia de mayor calidad, técnicamente avanzada, y por tanto, y en base al

derecho a la tutela judicial efectiva, un mejor y más rápido acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Es indudable que si se compara una Oficina Judicial llena de expedientes, y saturada de papeles, con la facilidad de pérdida de estos que existe, con una Oficina Judicial con un sistema de archivo de los documentos digitales, ofrece una imagen de rapidez, limpieza, efectividad y mayor seguridad.

12. BIBLIOGRAFIA

CONCLUSIONES DE LAS XVII JORNADAS ANUALES DE PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES [www.poderjudicial.es]. 2017. León [Consulta: 03-07-2018]. Disponible en: www.poderjudicial.es/stfls/.../Conclusiones%20_Jornadas_AP.pdf

DELGADO MARTIN, J. 2012. *Desafíos del Poder Judicial ante las nuevas tecnologías: una concepción integral del expediente judicial electrónico* (en línea). [Consulta 20-05-2018]. Disponible en: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Joaqu%C3%ADn%20Delgado%20Mart%C3%ADn.pdf?idFile=68e100a3-9a5e-481e-ac3b-9dcb0cbb241b

GARCIA TORRES, M.L. 2011. La tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, según ley 18/2011, de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia. Especial referencia al proceso civil. *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje* [en línea], pp 27-31 [Consulta: 03-07-2018] Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4405667>

GASCÓN INCHAUSTI, F. 2009. *LA E-JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA: BALANCE DE SITUACIÓN Y PLANES PARA EL FUTURO (EN DICIEMBRE DE 2009)* [en línea] [Consulta: 15-06-2018] Disponible en: <http://eprints.ucm.es/34950/1/2010-e-Justicia%20en%20UE.pdf>

Ley 18/2011, DE 5 DE Julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Boletín Oficial del Estado, núm. 160, de 6 de Julio de 2011, Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11605>

MINISTERIO DE JUSTICIA (n.d.). EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO Informes de Modernización Judicial en España. (NIPO: 051-11-058-4) Disponible en: www.sisej.com

